

Artículo publicado en *Informations et commentaires. Le développement en questions. Revue internationale de Sciences Sociales Appliquées (www.ismea.org)*, Grenoble, Francia. Es una versión actualizada de “Movimientos Sociales, Política y Estado”, ensayo publicado en *Opiniones y Análisis*, Número 84, Temas de coyuntura nacional, Tomo I, Fundemos/Hans Seidel Stiftung, La Paz, 2007 y difundido en este blog.

MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL GOBIERNO DE EVO MORALES

Un hecho que caracteriza la política boliviana es el protagonismo de movimientos sociales que combinan sus demandas sectoriales con propuestas de transformación política. A principios de 2000, se inició un ciclo de protestas contra el neoliberalismo y los partidos tradicionales que provocaron la renuncia de dos presidentes y el adelantamiento de elecciones generales. Este proceso tuvo un desenlace peculiar con la victoria electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) en diciembre de 2005 y el arribo de Evo Morales a la Presidencia de la República. Antes de este acontecimiento, las relaciones entre los movimientos sociales y la política institucional se caracterizaban por la confrontación con el Estado. Con Evo Morales en la presidencia, esas relaciones adquirieron un carácter inédito por la cercanía entre el gobierno del MAS y varias organizaciones populares, al punto que la gestión gubernamental se autodefine como un proceso íntimamente ligado a los movimientos sociales. El rol paralelo de Evo Morales como dirigente de los sindicatos de los campesinos cocaleros, jefe del partido de gobierno y presidente de la República es un símbolo de esa imbricación.

En este trabajo evaluamos la relación entre acción colectiva, política y Estado, a partir de delimitar las características de los movimientos sociales, su incidencia en los cambios políticos acontecidos en los últimos años y las modalidades de su relación con el proceso político conducido por el MAS, prestando atención a algunos actores sociales vinculados con -o afines a- el oficialismo.

Definiciones y características

Existen varias definiciones acerca de los movimiento sociales para dar cuenta de un fenómeno sociopolítico que se caracteriza por su diversidad y complejidad. Algunas corrientes teóricas lo abordan de manera descriptiva e intentan una taxonomía que toma en cuenta sus estructuras de movilización, repertorios de acción y formas de organización; o bien, los marcos interpretativos que proveen sentido y orientan la acción colectiva; también contemplan las oportunidades políticas que surgen por cambios en la trama de la institucionalidad estatal debido a una situación de crisis o la apertura del sistema político mediante una reforma incremental (*cf.* Mc Adam, Mc Carthy y Zald 1999). Desde otra perspectiva, se puede mencionar la influencia del contexto socio-político y de la relación de fuerzas en una coyuntura determinada; de los métodos de lucha y la capacidad organizativa de los movimientos sociales, de su ideología y de las pautas de cultura política.

Cuando el énfasis descriptivo da paso a una mirada de corte teleológico, los movimientos sociales son considerados como “la vanguardia” del proceso histórico que encarna las virtudes democráticas de la sociedad civil en contraposición a las tendencias autoritarias del poder estatal. Una mirada esencialista que no compartimos porque presupone que la acción colectiva tiene un sentido previamente asignado por un determinado principio (“revolución”, “progreso”, “democracia”) que desdeña la dinámica de las interacciones socio-política cuyos derroteros no pueden ser predeterminados.

Nuestra reflexión adopta una lectura analítico-descriptiva que pretende evitar esa mirada teleológica que, entre otras cosas, prescinde de una postura crítica respecto, por ejemplo, a la vigencia o ausencia de códigos democráticos en el desempeño y funcionamiento interno de los movimientos sociales. Así, la noción de movimiento social remite a una forma de acción colectiva que contempla grados de organización y elementos de solidaridad grupal que incluyen rasgos identitarios; acción colectiva que se articula en torno a demandas que provocan una relación conflictiva con el Estado y, en esa medida, excede las pautas institucionales establecidas para procesar sus reclamos cuestionando el sistema vigente (*cf.* Melucci 1999). Una acción colectiva puede adquirir diversos rasgos organizativos –estables o episódicos– dependiendo de su capacidad de movilización y del carácter de las demandas que esgrime, así como, del grado de autonomía respecto al Estado y la capacidad de las instituciones políticas para canalizar esas demandas.

En el caso boliviano, la noción de movimientos sociales se convirtió desde fines de los años noventa en un término de amplio uso periodístico y fue asimilado por varios actores sociales para autoidentificarse como agentes de la protesta social y portadores de propuestas de cambio. Desde la victoria de Evo Morales, el discurso gubernamental utiliza este término para referirse a una suerte de sujeto de la “revolución democrática y cultural” que propugna el MAS, o bien, como la base social que respalda las iniciativas oficialistas. Esta nominación generalizada se ha traducido en un manejo elástico del concepto, con escaso rigor conceptual. De esta manera, organizaciones sindicales, actos de protesta y movilizaciones de sectores organizados con diversos fines son descritos como movimientos sociales. En algunos casos, el elemento que define su carácter es un rasgo identitario, en otros, el tipo de acciones que realizan, o los objetivos de su movilización. Existen algunos intentos de análisis que, por ejemplo, evalúan su impacto general en la democracia a partir de considerar que los movimientos sociales “han transformado varios aspectos del campo político, modificando el espacio legítimo de dónde ir a producir política, rediseñando la condición socio-económica y étnica de los actores políticos, innovando nuevas técnicas sociales para hacer política, además de mutar los fines y sentido de la política” (García *et al.* 2004 :18). Aunque peca de exceso, esa evaluación pone en evidencia el lazo directo que se establece entre acción colectiva y política como un rasgo de la democracia boliviana.

No interesa discutir aspectos metodológicos sobre este tema sino precisar los criterios para estudiar los movimientos sociales. Uno de esos criterios tiene que ver con la capacidad organizativa de algunos movimientos que se sustenta en una larga tradición sindical. Es el caso del movimiento campesino organizado a nivel nacional en la Confederación Sindical Única de Trabajadores

Campeños de Bolivia (CSUTCB), fundada en 1979, y que desde principios de los años noventa promovió la formación de un “instrumento político”. Luego, se sitúa la emergencia del movimiento indígena como resultado de un debate respecto a la legitimidad del sindicato campesino como forma organizativa y el rescate de formas tradicionales de organización, en el altiplano y valles, que dieron origen a nuevas organizaciones como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qollasuyo (CONAMAQ). Paralelamente, se produjo la emergencia de organizaciones con sello identitario propio y modalidades específicas –“central”, “asamblea”, “coordinadora” – que representan a más de treinta pueblos indígenas de los llanos y amazonia, entre las que sobresalen la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Si el apelativo de pueblos indígenas se refiere a los grupos étnicos de tierras bajas, la noción de naciones originarias es esgrimida por quechuas y aymaras, de tierras altas. De ahí deriva la comprensión del movimiento campesino e indígena como un conglomerado de “naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos” que definió la orientación de la reforma estatal aprobada en la Asamblea Constituyente (2006-2007) con un modelo de “Estado plurinacional y comunitario”. Obviamente, un sector fundamental es el movimiento de campesinos y colonizadores productores de hoja de coca –el movimiento cocalero liderado por Evo Morales– porque jugó un papel central en la formación del MAS y es la base social de apoyo más consistente al gobierno.

Para esbozar un cuadro completo de la irrupción política de los movimientos sociales es necesario tomar en cuenta su vinculación con campañas y redes de carácter transnacional surgidas al influjo –o en contra– del proceso de globalización. Si las demandas por los derechos colectivos de los pueblos indígenas se convirtieron en un aspecto central del debate sobre la democracia y el desarrollo en los organismos internacionales (Banco Mundial, Organización de Naciones Unidas y Banco Interamericano de Desarrollo), también fueron asumidas por el movimiento antiglobalización o altermundista, un movimiento que congrega sindicatos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, redes de activistas y diversas organizaciones sociales y políticas del Norte y del Sur con posturas antineoliberales, ecologistas e indigenistas y propugna la democracia directa y la autogestión bajo la consigna “Otro mundo es posible”. De esta manera, así como el Convenio 169 sobre *Derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes* de la Organización Internacional del Trabajo formó parte de los repertorios de acción de los movimientos sociales locales; también fue importante su conexión con las redes y campañas de la sociedad civil global –como Jubileo 2000 y el Foro Social Mundial– como espacios favorables para apuntalar las acciones de protesta y las demandas de los movimientos sociales en el ámbito nacional.

La participación de los movimientos sociales bolivianos en las redes globales fue incrementándose desde fines de los años noventa, al compás de campañas internacionales por la condonación de la deuda externa, contra los tratados de libre comercio o por el comercio justo. Esta participación alimentó su discurso contestatario y también proporcionó criterios para formular alternativas a las políticas gubernamentales. Un ejemplo nítido de esta influencia es la conversión de la “lucha” contra los tratados de libre comercio –promovidos por Estados Unidos– en la promoción de una nueva política de relaciones internacionales bajo las pautas del comercio justo, que se presenta

como Tratado de Comercio de los Pueblos. Es un ejemplo del tránsito de “la protesta a la propuesta”, consigna enarbolada por el MAS en la campaña electoral de 2005 y que también es un eslogan que está presente en los discursos del Foro Social Mundial, espacio informal en el cual Evo Morales, como dirigente del movimiento campesino cocalero, era una figura relevante antes del impacto noticioso mundial de su presencia como “primer presidente indígena” de Bolivia. La mutación de la figura de Evo Morales –presente en dos mundos: el mundo de la política institucional y ese “Otro mundo es posible”- también representa simbólicamente la transformación de algunos movimientos sociales en base de apoyo electoral y político a un partido de gobierno.

El tránsito de una relación conflictiva a una lógica de cooperación con el Estado y la transformación de la autonomía contestataria en una imbricación con rasgos de cooptación gubernamental se produjeron en un contexto de crisis estatal. Este hecho explica la emergencia y protagonismo de los movimientos sociales antes de su incursión en las esferas del poder gubernamental.

Crisis estatal y movimientos sociales

La acción de los movimientos sociales se modificó de manera sustantiva a fines de los años noventa con la emergencia de nuevas demandas sociales. También se manifestó en el cuestionamiento al modelo económico neoliberal que, desde 1985, había privilegiado la inversión extranjera y reducido el papel del Estado, así como en el rechazo a un esquema de gobernabilidad basado en coaliciones de gobierno conformadas por partidos tradicionales.

Un rasgo de la crisis estatal fue la debilidad de la política institucional, esto es, la escasa representatividad e ineficacia de los partidos políticos y el parlamento. Desde principios de la presente década, las reivindicaciones sociales fueron planteadas a través de la acción directa y mediante procedimientos extraparlamentarios como huelgas, marchas, bloqueos de carreteras, ocupación de tierras, paros regionales, etc. Estas acciones expresaban una modalidad de participación definida como “la política en las calles” (Calderón y Szmukler 2000) en contraposición a la política que discurre por canales institucionales. Un estilo de acción colectiva con una larga historia en el país. Esta modalidad de incidencia política asumió una fuerza peculiar desde el año 2000 y fue practicada por nuevos movimientos sociales que esgrimían demandas en torno a las cuales se articularon diversas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Estas demandas tenían que ver con recursos naturales, agua, tierra, territorio, derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, y en la mayoría de los casos presentaban un fuerte contenido de reivindicación étnico-cultural y democracia participativa.

La apelación a la democracia participativa se tradujo en 2004 en el reconocimiento constitucional del referéndum, la asamblea constituyente y la iniciativa legislativa ciudadana como nuevas formas de participación política. También se aprobó la apertura del sistema de representación política a nuevos actores –agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas– en la disputa electoral eliminando el monopolio partidista en la política. Esas reformas institucionales

provocaron cambios en la democracia, incidieron en la orientación de las políticas públicas y en la toma de decisiones sobre temas cruciales, como hidrocarburos y descentralización política. Paralelamente, surgieron organizaciones políticas que representaban al movimiento campesino e indígena y que se organizaron sobre la base de redes sindicales y comunidades campesinas e indígenas. El MAS y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) participaron en las elecciones generales de 2002 y lograron escaños parlamentarios, el MAS tuvo mayor éxito puesto que logró el segundo lugar y se convirtió en la principal fuerza de oposición. A partir de su papel opositor se transformó en alternativa de poder y en las elecciones de 2005 obtuvo el primer lugar con una inédita mayoría absoluta de votos. De esta manera, Evo Morales se convirtió en el “primer presidente indígena” con el apoyo de movimientos sociales de diversa índole.

Los movimientos sociales y el gobierno del MAS

Los movimientos sociales que adquirieron protagonismo político en los últimos años son aquellos que esgrimen demandas étnico-culturales, como el movimiento indígena aymara y los pueblos indígenas de los llanos y la amazonía. En términos organizativos se expresa, en el primer caso, en la recuperación de formas tradicionales de organización en el altiplano y los valles andinos y la creación del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ). En el segundo caso, con la conformación de nuevas organizaciones como la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y, particularmente, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). El funcionamiento de estos movimientos se sustenta en una lógica de toma de decisiones “de abajo hacia arriba”, esto es, presenta un rasgo deliberativo; sus objetivos de lucha están definidos por la identidad étnico-cultural y el territorio. La emergencia y protagonismo del movimiento indígena tuvo un impulso adicional con el debate internacional sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas que adquirió una importancia creciente en diversos foros de Naciones Unidas y, a partir de 1992 —en ocasión de la conmemoración de los 500 años del inicio de la conquista española—, se convirtió en bandera de lucha y reivindicación étnico-cultural de un movimiento que asumió carácter continental.

Otro actor social de raigambre sindical que incursionó en el espacio político es el movimiento cocalero, conformado por campesinos productores de hoja de coca; una fuerza sindical que adquirió, desde fines de los años ochenta, un protagonismo particular e impulsó la creación del “instrumento político” del movimiento campesino en el seno de la CSUTCB hasta concluir en la creación del MAS. Su accionar fue decisivo en los conflictos sociales y políticos de los últimos años esgrimiendo un discurso que combina elementos étnico-culturales —como la defensa de las culturas originarias y la hoja de coca—, propuestas nacionalistas en relación a los recursos naturales y posturas anti norteamericanas por su oposición a la política antidrogas de Estados Unidos. Se trata de una organización que comporta rasgos del sindicalismo campesino tradicional pero adquiere nuevas connotaciones en coincidencia con la importancia que adquirieron los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional.

La irrupción y fortalecimiento de estos actores sociales (a los que suman el Movimiento Sin Tierra, la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba, la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto) modificó el escenario político electoral, el proceso decisonal y la orientación de las políticas públicas. Las demandas planteadas por estos movimientos a partir de una crítica al neoliberalismo y una revaloración del nacionalismo estatista en la economía, junto con la crítica a los partidos políticos y la reivindicación de inclusión política de los sectores campesinos e indígenas, modificaron la discursividad política. Un efecto de esta influencia fue la recomposición del sistema de partidos en los comicios de 2002, cuyos resultados provocaron la presencia de dirigentes de estos movimientos sociales como representantes parlamentarios del MAS y del MIP. Más adelante, con la victoria de Evo Morales en diciembre de 2005, se produjo su incursión en tareas gubernamentales como expresión de una imbricación *sui generis* entre movimientos sociales y partido de gobierno.

Desde la posesión de Evo Morales como presidente de la República se modificaron las relaciones entre movimientos sociales y el Estado, que en el pasado estaban teñidas de enemistad. Este cambio se expresa no solamente por el carácter que asumió el discurso gubernamental sino por la presencia orgánica de dirigentes de varias organizaciones en el poder ejecutivo y por los intentos de establecer mecanismos formales de coordinación entre el gobierno y movimientos sociales.

Los discursos de Evo Morales interpelaron a los movimientos sociales como parte del gobierno y como referentes de la gestión gubernamental en una variedad de temas:

Yo estoy convencido, si este nuevo parlamento que es producto de las luchas sociales responde al pueblo boliviano, este parlamento será el ejército de la liberación nacional, este parlamento será el ejército de la lucha por la segunda independencia... y si no pueden acá, seguirán siendo los movimientos sociales, [sobre todo] indígena, que sigan luchando por esa segunda independencia de nuestro país (Transmisión de mando presidencial, La Paz, 22 de enero de 2006).

... acá tenemos representantes de los movimientos sociales, empresariales, de regiones y de sectores. Es verdad, quiero decirles a los movimientos sociales, 15 ministerios no va a alcanzar para todos, pero 15 o 16 ministros que expresen el sentimiento, el pensamiento, el sufrimiento del pueblo boliviano (Posesión del gabinete ministerial, La Paz, 23 de enero de 2006)

Que bueno sería, ver en las fiestas patrias, juntos: Fuerzas Armadas, los movimientos sociales participando, recordando los aniversarios de los departamentos como también de la nación (Posesión del Alto Mando militar y policial, La Paz, 24 de enero de 2006).

... los movimientos sociales sí o sí tienen que ir en la Asamblea Constituyente... Tiene que haber la mayor participación de los movimientos sociales, del pueblo boliviano, de los territorios, tiene que haber legitimidad acompañada por la legalidad... con los movimientos sociales vamos a cumplir con nuestra tarea (Evaluación del primer mes de gobierno, La Paz, 22 de febrero de 2006).

...estoy seguro que ustedes como hermanos, como compañeros que vienen de los movimientos sociales de todos los sectores, pues apuesten por ese cambio... todos debemos orientarnos, unirnos quienes venimos fundamentalmente de los movimientos

sociales indígenas originarios campesinos, no estoy hablando del MAS, del partido (Instalación de la Asamblea Constituyente, Sucre, 6 de agosto de 2006).

...llegamos al gobierno con una propuesta... de gobierno discutida, debatida especialmente con los movimientos sociales

... todos podemos tener derecho a vivir mejor, pero cuando pensamos en vivir mejor, siempre afectamos ciertos intereses, y recogiendo las propuestas de los movimientos sociales el vivir bien tiene un hondo significado cultural, filosófico, social (Informe primer año de gestión, La Paz, 22 de enero de 2007).

Junto con la presencia de los movimientos sociales en los enunciados discursivos presidenciales, se tiene la participación directa de dirigentes en el gabinete ministerial como expresión de la imbricación entre gobierno y organizaciones sociales. Existen varios ejemplos de esta relación con el nombramiento como ministros/as de una dirigente de las trabajadoras de hogar, un representante de las cooperativas mineras, el máximo dirigente de las juntas vecinales de la ciudad de El Alto, una líder de las federaciones de mujeres campesinas o un representante del gremio del magisterio. Esto al margen de la presencia de varios dirigentes en el parlamento y en la bancada del MAS en la Asamblea Constituyente.

A la participación directa en el poder ejecutivo se suma la realización de eventos de evaluación gubernamental en asambleas sindicales; también la formación de una instancia orgánica –la Coordinadora Nacional por el Cambio– para articular la relación entre el gobierno y los movimientos sociales, al margen de la creación de un Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales que actúa, más bien, como una oficina gubernamental de manejo de conflictos.

La primera evaluación de la gestión gubernamental –definida por la prensa como una suerte de “examen ante los movimientos sociales”– se produjo a los seis meses de gestión gubernamental con la participación de dirigentes que cuestionaron el incumplimiento de promesas gubernamentales. En ocasión del cumplimiento del primer año de gobierno se organizó un evento público para brindar un “informe paralelo” al informe que Evo Morales presentó al Congreso Nacional, y que fue “divulgado ante los movimientos sociales que fueron convocados... a la Plaza de los Héroes en un escenario de fiesta” (La Razón, 22 de enero de 2007).

En esa oportunidad, se planteó la idea de crear una instancia de coordinación conformada por el poder ejecutivo, la bancada parlamentaria del MAS, dirigentes de los movimientos sociales afines al gobierno y representantes masistas en la Asamblea Constituyente. En palabras de Evo Morales: “Sería como un estado mayor del pueblo, donde se coordinarían todas las acciones y proyectos” (EL Deber, 22 de enero de 2007). Otros reportes de prensa se refieren a esta instancia como CONALCAM, compuesta por trece organizaciones sociales afines al MAS, como las confederaciones nacionales de campesinos y colonizadores, CIDOB, CONAMAQ y el Movimiento Sin Tierra, la Federación de Trabajadoras del Hogar, la Confederación de Jubilados y una organización de desocupados (La Razón, 24 de enero de 2007). Más adelante, sobre todo en 2008, esta organización aglutinó a múltiples organizaciones

sociales y tuvo enorme importancia en las movilizaciones a favor de la aprobación de una propuesta oficialista de nueva Constitución Política del Estado.

Desde otra perspectiva, las reuniones de evaluación pueden entenderse como ampliados sindicales que remplazan a los congresos partidistas y su realización es otra modalidad de vinculación que permite al gobierno contener las críticas a su desempeño y/o recibir demandas de manera controlada.

Este tipo de vinculación del partido de gobierno con sus aliados sociales permite reflexionar sobre las características del MAS como movimiento político. Una faceta de ese vínculo es la formación de una “coalición inestable” en torno al MAS, porque permite evaluar las diversas relaciones entre el partido de gobierno y los movimientos sociales, como los cocaleros, indígenas y cooperativistas mineros.

El movimiento cocalero tiene su base sindical en las Federaciones de Campesinos del Trópico del departamento de Cochabamba y es el germen del MAS como “instrumento político” del movimiento campesino. La reelección de Evo Morales como principal dirigente de las federaciones sindicales de los cocaleros a pesar que asumió la Presidencia de la República es una muestra de la simbiosis entre partido, gobierno y movimiento social. En esa medida, el primer círculo de esa “coalición inestable” está conformado por una relación entre partido y organizaciones sindicales que comparten base social y dirigencia. La presencia de dirigentes cocaleros en cargos municipales y parlamentarios se inició en 1997 pero se acrecentó en los siguientes años y, luego, se trasladó al gobierno central.

Otro actor importante es el movimiento de los cooperativistas mineros aglutinados en una federación nacional (FENCOMIN) que tuvo un papel decisivo en la movilización electoral a favor del MAS. La relación entre el gobierno y este sector muestra cierta complejidad porque FENCOMIN eran aliados incuestionables hasta octubre de 2006, cuando se produjeron trágicos enfrentamientos entre cooperativistas y trabajadores asalariados de la empresa estatal a raíz de una disputa respecto a la explotación de un yacimiento de estaño. Dos organizaciones con afinidad al partido de gobierno desataron un conflicto que fue evaluado por Evo Morales como parte de una “conspiración interna y externa, operada por sectores conservadores que se oponen al proceso de cambio” y respecto a los grupos en disputa señaló que eran “... un instrumento para evitar el cambio del modelo neoliberal” (Los Tiempos, 7 de octubre de 2006). De esta manera, al margen de las peculiaridades del conflicto, el discurso gubernamental evaluaba el accionar de los movimientos sociales a partir de su articulación –o distanciamiento respecto- al proyecto político del MAS. La destitución de un dirigente cooperativista que ejercía el cargo de ministro de Minería y Metalurgia y su reemplazo por un representante de los trabajadores asalariados marcó durante una par de años el distanciamiento de FENCOMIN. Además, los cooperativistas rechazaron una política gubernamental que pretendía aplicar un aumento de impuestos y la reactivación de la empresa estatal en el sector minero. Desde entonces, las relaciones entre este sector y el gobierno transitaron entre la negociación y el reclamo pero, finalmente, se resolvieron con la exclusión de las cooperativas mineras del

incremento impositivo y el reconocimiento de sus derechos en la nueva Constitución.

El movimiento campesino e indígena, al margen de sus vínculos con el MAS y la participación de varios dirigentes como representantes en la Asamblea Constituyente, actuó de manera coordinada bajo la sigla de una supra organización denominada Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas Originarias Campesinas y de Colonizadores de Bolivia (también conocida como “Pacto de Unidad”) que presentó una propuesta de nuevo texto constitucional. El “Pacto de Unidad” aglutinó a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (FMCBBS), Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Confederación de Pueblos Moxeños del Beni (CPEMB), Movimiento Sin Tierra (MST) y Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Vale la pena resaltar que las organizaciones sindicales del movimiento cocalero no formaron parte del “Pacto de Unidad”, y este grupo presentó una propuesta de nuevo texto constitucional en la Asamblea Constituyente bajo el título: “Por un Estado Plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas”, que fue asumida por el MAS como propuesta oficial. Durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente, algunas organizaciones del “Pacto de Unidad” cuestionaron las negociaciones del MAS con la oposición y rechazaron incorporar enmiendas a su proyecto de constitución, pero terminaron alineándose a las decisiones del gobierno.

Como puede verse, las relaciones entre los movimientos sociales y el MAS no pueden comprenderse bajo la antinomia convencional de autonomía o cooptación, aunque en los últimos meses del año 2008 se modificaron esas relaciones porque CONALCAM se transformó en una instancia organizativa que permitió al MAS controlar el accionar de la diversidad de organizaciones sociales.

¿Una “coalición inestable” de movimientos sociales?

El discurso de Evo Morales no se limita a reconocer el protagonismo de los movimientos sociales que son interpelados como agentes del “proceso de cambio” y referentes de la labor gubernamental. En esa medida, el MAS no representa a los movimientos sociales sino que forma parte de una coalición de actores sociales y políticos que se aglutinan bajo el liderazgo de Evo Morales, convertido en el factor de unificación simbólica y de conducción práctica. Pero se trata de una “coalición inestable” porque varios movimientos sociales son la base de apoyo orgánico y permanente del MAS, como los campesinos cocaleros y los colonizadores. Otras organizaciones son circunstancialmente aliadas del partido de gobierno, entre las que se destacan los cooperativistas mineros y algunos sindicatos obreros. Otras organizaciones se adscriben a la línea gubernamental pero no ingresan al círculo de aliados ni forman parte de la base social de apoyo al gobierno, como la Central Obrera Boliviana y sectores del magisterio, que en algunas circunstancias se muestran como oposición sindical.

O bien, determinadas organizaciones indígenas -como CONAMAQ y CIDOB- actuaron alternativamente como aliados o grupos de presión, particularmente en la Asamblea Constituyente.

Es decir, en la medida que las demandas de un movimiento social son canalizadas por el MAS se produce un lazo fuerte y se torna estable su participación en la coalición oficialista. En la medida que se origina una disyunción entre demanda social y política gubernamental, el vínculo del movimiento social con el MAS se debilita o rompe momentáneamente. Por ello, la coalición adquiere rasgos de inestabilidad porque varía el tipo de lazo entre movimientos sociales y partido de gobierno, y porque este lazo depende de la correspondencia entre demanda y decisión gubernamental.

Institucionalización de las relaciones entre gobierno y movimientos sociales

Sin embargo, después de la aprobación del proyecto de nueva constitución en la Asamblea Constituyente, en diciembre de 2007, con votos del oficialismo y rechazo de la oposición, se agudizó la crisis política. La polarización ideológica y la conflictividad social dividieron al país entre regiones que apoyaban al MAS –los departamentos de tierras altas- y regiones adversas a Evo Morales –los departamento de tierras bajas,- que reclamaban autonomías departamentales para contrarrestar la victoria del MAS en la Asamblea Constituyente. Para evitar la aprobación de la nueva constitución política del estado, la oposición parlamentaria dilató la aprobación de la convocatoria al referéndum que debía ratificar la nueva constitución y la oposición regional – conformada por autoridades departamentales y movimientos cívicos de carácter urbano- organizó protestas radicales. Frente a esta situación, el MAS fortaleció a la Conalcam y la convirtió en una organización que abarcó a la generalidad de los movimientos sociales bajo la conducción del partido de gobierno, más precisamente, de Evo Morales,.

Como vimos, la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) surgió en ocasión del cumplimiento del primer año de gestión gubernamental en un evento público para brindar un “informe paralelo” al informe presidencial presentado al Congreso Nacional. Aunque en esferas gubernamentales se mencionó que CONALCAM estaría “por encima del gabinete e incluso de los poderes ejecutivo, legislativo y Judicial” y tendría “un fuerte nivel de decisión en los ámbitos político, económico y social en el proceso de cambio” (La Razón, 24 de enero de 2007), su accionar fue intermitente y su protagonismo casi nulo hasta que el MAS encaró la tarea de concluir el proceso constituyente con la aprobación de la nueva Constitución mediante referéndum. Durante el año 2008, cambió el cariz de CONALCAM porque aglutinó a las organizaciones que formaban parte del Pacto de Unidad y amplió su convocatoria a todas las organizaciones sindicales y de otros sectores (juntas vecinales, gremiales, jubilados, estudiantes, cooperativistas), e inclusive a la Central Obrera Boliviana que se sumó a varias acciones desplegadas en una suerte de pacto con el gobierno. En cierta medida era una respuesta oficialista a los empeños organizativos y la capacidad movilizadora de la oposición regional que aglutinaba a los prefectos y comités cívicos en rechazo al proyecto de la nueva Constitución.

Entonces se puso de manifiesto la complejidad del liderazgo de Evo Morales porque, en su condición de presidente de la república y jefe del MAS, se encargó de dirigir un par de cruciales asambleas de CONALCAM. Vale destacar la metodología que utilizó para tomar decisiones en ocasión de los conflictos suscitados en septiembre y octubre de 2008, cuando CONALCAM respondió las protestas opositoras con movilizaciones sociales - sobre todo campesinas e indígenas- y marchas a Santa Cruz y, luego, a la sede de gobierno para presionar por la convocatoria al referéndum constitucional. En un par de reuniones bajo el formato de las asambleas sindicales se produjo la presentación de variadas posiciones y el debate consecuente para definir las medidas a tomar; con la presencia de Evo Morales como moderador en los tramos decisivos de uno de los eventos que duró alrededor de veinte horas y que fue transmitido en directo por una radioemisora estatal. Al margen que se impuso la línea gubernamental es preciso resaltar que la decisión presidencial se sustentó en la lógica del asambleismo sindical, el debate se ventiló públicamente y, obviamente, las medidas fueron acatadas por todas las organizaciones participantes. Es decir, el liderazgo de Evo Morales se impuso no solamente por la disponibilidad de los recursos de poder gubernamentales (su condición de presidente de la república) y partidistas (su condición de jefe del MAS con capacidad de manejo de varias federaciones sindicales) sino porque estableció una interacción directa con organizaciones sociales que trascendían los intentos de control de la organización partidista o del aparato gubernamental. Es decir, Conalcam no era el brazo sindical del MAS, no obstante operaba como sustento político del gobierno, merced a la presencia del presidente de la república actuando bajo los códigos del sindicalismo.

En suma, el liderazgo de Evo Morales no se limita a la movilización de su organización partidista ni a la disponibilidad de sus bases electorales. La interacción con los movimientos sociales implicó un intercambio constante bajo formatos organizativos que se fueron adaptando a las exigencias de la coyuntura política y a las necesidades de la pugna con la oposición parlamentaria y regional. La utilización de diversos recursos de poder muestra la complejidad de las relaciones entre el liderazgo de Evo Morales y los movimientos sociales.

BIBLIOGRAFIA

Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia. 2006. "Por un Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas", La Paz. Separata periodística.

Calderón, Fernando y Alicia Szmukler. 2000. *La política en las calles*. Plural/CERES, La Paz.

García Linera, Álvaro, Marxa Chávez León y Patricia Costas Monje. 2004. *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. Oxfam-Diakonía, La Paz.

McAdam, Doug, John D. McCarthy y Mayer N. Zald. 1999. *Movimientos sociales. Perspectivas comparadas*. Istmo, Madrid y México.

Melucci, Alberto. 1999. *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. El Colegio de México, México.